

## EL ROL DEL PARROCO EN LA REFORMA DEL PROCESO MATRIMONIAL CANONICO. PASTOR, CONSEJERO, ASESOR

### A. La nueva figura del párroco

Con ocasión de los dos sínodos de los Obispos sobre la familia y, sobre todo, con la promulgación del m.p. *Mitis iudex Dominus Iesus*, la atención sobre el párroco y el rol de éste ha sido mayormente considerado.

¿Qué puede hacer el párroco, pastor propio que preside en la caridad, esta particular porción del pueblo de Dios, en el proceso de nulidad matrimonial? ¿Tiene el párroco un rol en la reforma procesal matrimonial?

Una de las principales funciones encomendadas a los párrocos (cf. cc. 529 § 1 y 1063) es la de tener y manifestar “solicitud pastoral hacia estos fieles en dificultad” (art.1), es sujeto activo en el ejercicio de la caridad pastoral. En cuanto protagonista y sujeto de la proximidad pastoral, criterio fundamental de la reforma, el párroco debería ejercitar su ministerio de pastor (c.519), desde una óptica más rica y dinámica. En este sentido, el Papa Francisco les dice a los párrocos: “En la mayor parte de los casos son (los párrocos) los primeros interlocutores de los jóvenes que desean formar una nueva familia y casarse por el sacramento del matrimonio. Y también se dirigen a ustedes esos cónyuges que, a causa de serios problemas en su relación, se encuentran en crisis, necesitan reavivar la fe y redescubrir la gracia del sacramento; y en ciertos casos piden indicaciones para iniciar un proceso de nulidad. Nadie mejor que vosotros conoce y está en contacto con la realidad del tejido social en el territorio, experimentando la complejidad variada: uniones celebradas en Cristo, uniones de hecho, uniones civiles, uniones fracasadas, familias y jóvenes felices e infelices. De cada persona y de cada situación ustedes están llamados a ser compañeros de viaje para testimoniar y sostener” .

De estas afirmaciones podemos sostener que frente a situaciones matrimoniales de las que se ocupa el MIDI, el párroco es el hermano que se acerca y conoce a los fieles que se le encomiendan, se pone en una actitud de escucha y de comprensión. Es decir, acompaña, discierne e integra eclesialmente las distintas situaciones matrimoniales que pueden necesitar de su peculiar intervención.

### B. El párroco en las Reglas procesales:

Una afirmación. Al párroco, en cuanto tal, no le corresponde legalmente ninguna función determinada en el proceso de nulidad matrimonial. A menos que no venga incluido como testigo, de parte o de oficio, o le soliciten informaciones sobre la credibilidad o religiosidad de las partes o de los testigos de la causa; el MIDI, no le reconoce una función judicial *ex officio*. Pero si una importante función prejudicial y pastoral en estas situaciones.

Recordemos, que la reforma es fruto de la preocupación del papa por los tantos cónyuges que han visto no solo fracasada la experiencia de su matrimonio, sino, sobre todo, que se han sentido alejados física y moralmente de la Iglesia. Ante esta situación, humano-espiritual, el Papa propone “caridad y misericordia”, para acercarse a todos ellos (Proemio). Nos vamos a referir, por lo mismo,

a la llamada “investigación prejudicial o pastoral” (art.2), manifestación de esta “solicitud pastoral” o cuidado al cual el papa invita a toda la Iglesia y que ya estaba presente en el Código (c. 1064). Instancia de acogida, información, consejería, mediación, que se abre con la acogida en las estructuras eclesiales, (diocesanas, interdiocesanas o parroquiales), a los fieles separados o divorciados (art.2) y que se puede concluir con la presentación eventual del escrito de demanda ante el Tribunal competente (art.5).

La IPP, es un particular servicio parroquial, de acogida de personas separadas o divorciadas que dudan de la validez de su matrimonio o están convencidas de la nulidad del mismo, para en primer lugar integrarlas y reconocerlas como tales en el seno de su iglesia. Será clave para comprender el rol del párroco, analizar la función que le corresponde en la realización del llamado discernimiento pastoral diferencial (AL79; FC 84).

#### B.1.- La Investigación Pastoral o prejudicial.

En línea con la “preocupación por la salvación de las almas...deseando proveer a la conciencia de los fieles que, con demasiada frecuencia quedan apartados de las estructuras jurídicas de la Iglesia” (Proemio), el párroco es el primer “interlocutor” con el cual los fieles pueden retomar su práctica eclesial. Él deberá facilitar el acceso de los fieles que se consideran separados de la Iglesia. a la experiencia eclesial. En esta línea el documento propone que se creen en las diócesis, arciprestazgos, parroquias, etc., estructuras estables de asesoría o de orientación pastorales-jurídicas que puedan ayudar a las personas a conocer su condición y a recoger los elementos útiles para un eventual proceso de nulidad matrimonial, de modo que, una vez presentada la demanda, el proceso discurra con la mayor rapidez posible (arts. 2-5 RP).

Pero esta instancia, para que realmente cumpla su objetivo (art.2), debe evitar tres errores: ser realizadas por personas sin formación jurídico-canónica, que se transforme en obstáculo para acceder al Tribunal transformándose en un verdadero proceso sustituyendo una comprobación propiamente judicial, y, finalmente, que su resultado final sea interpretado como la “instrucción” de un futuro proceso, dispensándose la investigación propiamente en sede procesal

1.- Naturaleza de la investigación. Pilar de la reforma, en el ámbito de la pastoral matrimonial diocesana. Destinada a aquellos fieles separados o divorciados que o dudan acerca de la validez de su matrimonio o incluso están convencidos de su nulidad. Será llevada a cabo por personas que el Ordinario del lugar considere idóneas.

¿Qué es y cuál es el objetivo de este “servicio jurídico pastoral”?

Considerando el principio de unidad entre la actividad judicial y pastoral, podemos considerar que la “Investigatio praeiudicialis seu pastoralis”, es, gracias al uso de la partícula latina seu, una sinonimia, con la cual se unen dos conceptos de un mismo valor. El latino seu, entonces, indica una sinonimia que pone en el mismo nivel lógico e sintáctico prejudicial y pastoral; por lo tanto, los adjetivos prejudicial y pastoral tiene un significado equivalente y no alternativo o adversativo. Creemos, por lo mismo, que una correcta interpretación de la conjunción “o”, no corresponde solo ni a una investigación prejudicial, necesariamente precedente al inicio de un proceso judicial, de comprobación de la validez de un vínculo, ni solo a una investigación pastoral, que necesariamente

deba ser una investigación que persiga la reconciliación de las partes. Una investigación prejudicial, además, de no ser judicial ni reconciliatoria, puede conducir a otras soluciones sin que estas signifiquen necesariamente un proceso, como, igualmente, es pastoral una solución de la crisis que no necesariamente concluya en una reconciliación entre los cónyuges separados. Entonces, en el espíritu de la reforma, se trata de una única y misma investigación, que simultáneamente es prejudicial y pastoral. A nuestro juicio, en un primer impulso interpretador –y tenida cuenta especialmente del n.º 117 del instrumentum laboris – con la enumeración y equiparación de los términos *praeiudicialis et pastoralis*, el Legislador, ha querido hacer notar –entre otros posibles– dos asuntos: la clara situación de la investigación prejudicial fuera del proceso matrimonial y el carácter facultativo que tienen las partes para optar o no, por su uso.

El art. 2 describe esta etapa pastoral prejudicial, como aquella que “acoge en las estructuras parroquiales o diocesanas a los fieles separados o divorciados que dudan sobre la validez del propio matrimonio o están convencidos de su nulidad”. La misma tiene una doble finalidad: conocer la condición de los cónyuges separados o divorciados y a recoger elementos útiles para la eventual celebración del proceso judicial, ordinario o más breve. Esta investigación pastoral se realizará en el ámbito de la pastoral matrimonial diocesana unitaria”.

Los fines de tal investigación, según los arts. 2 y 4 de la *Ratio procedendi*, pueden sintetizarse así: ayudar a los fieles a conocer su condición (art. 2); recopilar elementos útiles para la celebración eventual del proceso judicial, entre otros, averiguar si las partes están de acuerdo en pedir la nulidad (arts. 2 y 4).

Tras una lectura atenta de los artículos 1 al 5 de las Reglas Procedimentales, en los cuales se habla de “investigación” y de “oficio de consulta”, podemos sostener que “conocer la condición”, es un análisis de la concreta situación matrimonial fracasada, previo al posible proceso judicial. El mismo “conocer”, con frecuencia tendrá una doble finalidad: conocer la situación eclesial de los fieles y conocer los posibles elementos de nulidad matrimonial presentes en tal situación. Es una atención pastoral especializada de pastoral judicial, que es considerada conveniente o, a veces, necesaria o indispensable para dar, posteriormente, lugar al inicio de un proceso judicial, no solamente válido, sino también eficaz y trascendente.

Presidida y coordinada por quien está revestido de potestad administrativa, Obispo o párroco, se inicia a instancia de parte, tiene por finalidad concluir, o no, con un hipotético escrito de demanda. La investigación prejudicial o pastoral es una etapa facultativa, porque desplegada a instancia de los cónyuges por personas u órganos competentes, quienes ayudaran a los cónyuges a recopilar (“*colligantur*”) los elementos de juicio que permitan efectuar o desestimar una intimación clara, precisa y circunstanciada (art. 5).

a. Investigar comporta tres acciones técnicas: indagar, individuar y reunir las causas objetivas del fallido matrimonio. esta investigación pastoral solo puede ser solicitada por: “los fieles separados o divorciados que dudan de la validez del propio matrimonio o están convencidos de la nulidad del mismo” (art.2). Se trata de indagar si se encuentran las condiciones para proceder a aconsejar la introducción de la causa: etapa de *colligantur elementa utilia* (art.2), para la eventual celebración del proceso judicial ordinario o más breve. Por lo tanto, es una investigación sobre la presencia de las condiciones que amerite aconsejar o no la introducción de una causa de nulidad matrimonial y sobre la individuación y reunión de los elementos jurídicos útiles para prepararla.

b. Prejudicial, más que prejudicial, es previa, antecedente al proceso, preprocesal o previa al proceso contencioso de declaración de nulidad matrimonial.

c. Pastoral, porque tiene un objetivo eminentemente pastoral: mostrar la solicitud de la Iglesia hacia los cónyuges en dificultad (art.1). También es pastoral porque está vinculada a la pastoral familiar ordinaria (AL244), hacia el interior de la pastoral matrimonial unitaria sea diocesana sea parroquial (art.2). Unitaria, sugiere que el acompañamiento para una eventual causa judicial se inserta como parte de una acogida y acompañamiento más amplio y extenso, ofrecido a los fieles conforme a la pastoral matrimonial. Tras la acogida y el acompañamiento si aparecen indicios suficientes de duda acerca de la validez del matrimonio, se emitirá un parecer jurídico para introducir el libelo.

#### Competencias.

El art. 3 Ratio procedendi comienza diciendo que “La misma investigación será confiada por el Ordinario de lugar a personas consideradas idóneas, (...)”, personas todas “dotadas de competencias no sólo exclusivamente jurídico-cánónicas”.

Parece lógico, si recordamos el discurso del Papa a los párrocos durante el mes de febrero del año 2017, que se encomiende esta labor, en primer lugar, a los párrocos (el propio del domicilio o el que hubiera preparado a la pareja para la celebración de su boda, c. 1063, 2). Pero MIDI admite que esta tarea (munus) (c.145,2) pueda ser también llevado a cabo por otras personas competentes, clérigos, laicos, religiosos, que puedan desempeñar esta tarea con suficiente habilidad, previamente aprobados por el Ordinario del lugar.

El hecho de que el texto legal utilice el término munus implica la opción del Legislador por la identificación del c. 145 con el de oficio eclesiástico, por tanto un oficio que deberá “ser establemente erigido por la autoridad, esto quiere decir, creado en modo abstracto en el mundo jurídico y dotado de subjetividad en el ordenamiento de la Iglesia; delimitado y configurado por el Derecho canónico en cuanto a sus cometidos (c. 145 §2); y ser conferido simultánea o sucesivamente a un sujeto mediante un acto de provisión canónica” a través de un decreto (cc.48; 51)

En el caso del párroco, quien comparte con el Obispo diocesano, el oficio propio de la solicitud pastoral hacia estos fieles en dificultad, no tiene necesidad de la aprobación de parte del ordinario del lugar, como si lo necesitan los otros niveles de consejeros. El párroco, por su solo oficio, está habilitado para esto. Es decir, el párroco “ratione officii”, puede desarrollar esta tarea de consejería, pero siempre y cuando en conciencia sea competente para tal función. En línea con esta “capacidad”, requerida y supuesta en el párroco, es congruente, hoy en día, exigirles una preparación suficiente para una adecuada actuación de sus deberes en este nuevo deber parroquial (can.530), como manifestación de su solicitud pastoral hacia las familias, que le permita realizar un servicio de consejería efectivamente de acogida y ayuda a los cónyuges y no de improvisación. Si un párroco es consciente de no tener la suficiente competencia e idoneidad, debe renunciar o al menos, hacerse ayudar por personas verdaderamente competentes, que deberán contar con la aprobación del Ordinario (art.3). Si es confiada a él y efectivamente éste la realiza, deberá recoger los elementos útiles para una eventual celebración del proceso judicial, ordinario o más breve (RP

art.2). Es oportuno que, al menos en la fase final de esta investigación, participe una persona verdaderamente experta en derecho matrimonial canónico, que pueda establecer si existen suficientes motivos de nulidad.

La función consultiva prejudicial pastoral, garantizada en su organización y uniformidad en la Iglesia particular y concretada en la Iglesia local por el párroco, deberá o simultáneamente o inmediatamente después, ser analizada desde la ciencia canónica sobre el matrimonio. Y esto no se puede hacer de manera aproximativa, improvisadamente, y sin ninguna preparación canónica en mérito. El art. 3 afirma que quienes realizan esta investigación, no solo deben ser personas idóneas, desde el punto de vista eclesial y moral, sino, también, personas “dotadas de competencias no sólo exclusivamente jurídico-canónicas”. Para interpretar correctamente esta afirmación, debemos señalar que lo que significa es que, no quiere decir que no las deban poseer, sino que al menos deben poseer competencias jurídico-canónicas.

Esta necesaria y suficiente preparación canónica es urgente, sobre todo porque la finalidad de la IPP es la de identificar, también, los “elementos útiles para la celebración eventual del proceso judicial”, y de este modo aconsejar la introducción o no de un proceso de nulidad matrimonial. A los oficios ya previstos por el Código de Derecho Canónico, la reforma introducida por el Papa Francisco añade, de hecho, otros recursos de personal que son necesarios para garantizar un adecuado servicio pastoral-judicial. Dentro de estas nuevas figuras, encontramos a los “consejeros”, quienes según el art. 113, § 1 DC y los artículos 2-5 de la Ratio procedendi anexa al Motu proprio, se relacionan con la investigación previa.

En este sentido la Congregación para la Educación Católica, ha elaborado recientemente una Instrucción Los estudios de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial, “para responder a las nuevas exigencias manifestadas en los Motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus, sobre la reforma del proceso canónico para las causas de declaración de nulidad del matrimonio, con el objetivo de impulsar y de ofrecer orientaciones a los estudios de Derecho Canónico”. Los consejeros que participan con diferentes funciones en los procesos de declaración de nulidad del matrimonio pueden ser agrupados en tres categorías, según una correcta y realista imagen de círculos concéntricos para sucesivos y necesarios asesoramientos siempre más profundos:

— Los párrocos u otros «dotados de competencias no sólo exclusivamente jurídico-canónicas» (art. 3 RP, primera frase): se descubre en estos consejeros a aquellos que tienen la ocasión calificada de realizar un primer contacto con las personas potencialmente interesadas en la verificación de la nulidad de su matrimonio; ellos podrían ser denominados consejeros del primer nivel;

— Los miembros de una «estructura estable» (art. 3 RP, tercera frase): clérigos, religiosos o laicos que trabajan como consejeros familiares. Este nivel de asesoría y de acompañamiento pastoral-psicológico tiene también el objetivo de precisar si en una realidad aparecen motivos y pruebas suficientes para introducir una causa de nulidad de manera que eviten comenzar de modo equivocado una causa de nulidad; se trata de los consejeros del segundo nivel; Para su formación se ofrece un Diploma de Consejero Matrimonial y Familiar como currículo de estudio, que ayudará en un acompañamiento y discernimiento pastoral (art. 23,2); La formación de los consejeros del segundo nivel dura al menos la totalidad de un año académico (art.25)

— Los abogados (art. 4 RP): esta última fase de la asesoría, si es positiva, se concluye con la presentación de la demanda al Tribunal, para la cual el abogado ayuda a precisar los elementos sustanciales y probatorios útiles, a recoger las pruebas ya disponibles, a escuchar si es el caso el parecer de la otra parte y a predisponer todo para la introducción de la causa; estos son los consejeros del tercer nivel. Si no han obtenido el título de licenciado en derecho canónico, deberán obtener el Diploma en Derecho Matrimonial y Procesal que los habilitará como vere peritus; la formación de los consejeros del tercer nivel dura al menos la totalidad de un año académico (art. 28)

El perfil pastoral y profesional debe ser garantizado sobre todo a través de una adecuada formación, que responda a las diversas tareas que deben ser desarrolladas. El elenco de los oficios no iguala en un mismo nivel el grado de preparación requerido de acuerdo a la variedad de las personas que los deben ocupar, pero la diversidad de funciones exige una diferenciación de los programas formativos para las varias categorías indicadas. La ley eclesiástica no pide obligatoriamente para todos los oficios el grado académico, pero esto no significa ni que esté prohibido ni que de hecho para algunos casos sea necesario o conveniente. Es decir, no lo exige, pero tampoco lo impide.

Las nuevas disposiciones del Motu proprio exigen, por lo mismo, y de eso se hace cargo la Instrucción de la Congregación para la Educación Católica, de una preparación diferenciada y suficiente “en materias no solo exclusivamente jurídico-canónicas”, de los diversos consejeros que prestan este servicio eclesiástico.

Entre estos consejeros o colaboradores pastorales a los cuales los fieles pueden dirigirse para encontrar ayuda espiritual y jurídica, en relación con la validez del vínculo matrimonial, existe una gradación, que está encabezada por el párroco, consejero de primer nivel, porque es aquel que tiene la ocasión calificada de realizar un primer contacto con las personas potencialmente interesadas en la verificación de la nulidad de su matrimonio. El perfil pastoral y profesional, de cada uno de estos niveles, debe ser garantizado sobre todo a través de una adecuada formación académica, que responda a las diversas tareas que deben ser desarrolladas. En el caso de los párrocos este documento propone que reciban, de parte de las facultades de derecho canónico o de la cátedra de derecho canónico de las facultades de teología, programas, cursos breves o también otros más consistentes (con la entrega de un diploma), de al menos un semestre de Derecho Matrimonial y Procesal (art.21). Finalmente, el Art. 22 §1, va a establecer que, “La Cátedra de Derecho Canónico ofrece para los consejeros del primer nivel también curso para la formación permanente, de modo que puedan aconsejar con eficacia, según las normas del Derecho Matrimonial y Procesal”. Y que, “§ 2. En cooperación con otras Cátedras de Teología, el currículo puede prever también otros cursos complementarios” .

### C.- La función del Párroco en la IPP

Considerando las dos finalidades de la IPP (conocer la condición de los cónyuges y recopilar elementos útiles para un eventual proceso judicial), podemos determinar cuáles son las actividades que el MIDI le encomienda al párroco.

1.- Solicitud pastoral para conocer la condición eclesial de los cónyuges separados o divorciados: En el contexto de la reforma procesal matrimonial y en relación a la investigación prejudicial o pastoral,

en la que al párroco se le reconoce una presencia activa, es importante referirnos a algunos elementos constitutivos de su ministerio (c. 529) de solicitud pastoral:

El Art. 1, afirma: El Obispo, en virtud del can. 383 §1, está obligado a acompañar con ánimo apostólico a los cónyuges separados o divorciados, que por su condición de vida hayan eventualmente abandonado la práctica religiosa. Por lo tanto, comparte con los párrocos (cf. can. 529 § 1) la solicitud pastoral hacia estos fieles en dificultad. Solicitud que es cercanía, preocupación, diligencia y cuidado hacia esa una particular categoría de fieles de su comunidad. Deberá destinarles tiempo y energías ministeriales.

1.a.- Acompañamiento y proximidad. En el contexto de la cura pastoral de una determinada comunidad de fieles que se le encomienda, (c.515), él en cuanto pastor propio, se encuentra en una situación privilegiada no solo para acompañar si no, también, para cumplir esa proximidad y cercanía que el MIDI considera central para la administración de justicia eclesial.

El derecho universal obliga al párroco a “conocer a los fieles que se le encomienden...visitando a las familias...poniendo los medios para que los cónyuges puedan cumplir sus propios deberes” (c.529) para esto debe de ir al encuentro de los cónyuges en crisis (art.1). El art. 1, en relación al can. 529, empeña al párroco, junto al Obispo, a compartir la solicitud pastoral con los fieles que se encuentran en dificultad matrimonial o que han abandonado la práctica religiosa. El can. 529,1 por su parte, establece una serie de obligaciones del párroco, entre las cuales la de visitar las familias y la de poner los medios necesarios para que los cónyuges y los padres sean ayudados en el cumplimiento de sus propios deberes paternos y se fomente de la mejor forma la vida cristiana en el seno de las familias.

El artículo 1 lo obliga, como manifestación de su propia solicitud de pastor propio, a preocuparse especialmente de estos fieles separados o divorciados, en cuanto está obligado, como pastor propio, a ir al encuentro de sus fieles que tienen necesidad de un especial cuidado pastoral debido a la situación matrimonial en la que viven. Los párrocos, personalmente o por medio de colaboradores pastorales, contactarán con los feligreses canónicamente casados y posteriormente separados o divorciados, para hacer una primera indagación sobre si puede haber dudas de la validez de su matrimonio.

El MIDI le encomienda, en virtud de su oficio (can. 529), y bajo la autoridad del Obispo diocesano, la responsabilidad de administrar la investigación pastoral (art.2). Podemos comprender que éste aproximarse a los esposos, especialmente cuando atraviesan momentos de angustias y dolores por dificultades y fracasos, está en directa relación, más aún, forma parte integrante de su oficio de pastor (*officium pastoris*), que acompaña, (can. 519). Tal oficio de cura pastoral, implica, ciertamente, en primer lugar, el conocimiento de las familias, la visita a las mismas, la participación en sus preocupaciones, la corrección prudente si se han apartado de las buenas conductas, la atención solícita a cuantos se encuentran en particulares dificultades. Este programa de acompañamiento y celo pastoral, se inserta “en el ámbito de la pastoral matrimonial diocesana unitaria” (art.2), para el cual, el párroco, no cabe duda, deberá poder contar con la colaboración de otras personas, pertenecientes o no a su parroquia, a las que se les reconocerá y promoverá en su particular función.

La ratio legis del artículo 1 la encontramos en el hecho que la parroquia y el párroco son las instancias eclesiales más próximas a los cónyuges separados o divorciados que dudan de la validez del propio matrimonio o que están convencidos de la nulidad del mismo (art.1). La parroquia, que vive entre las casas de sus fieles, se deberá poner creativamente los medios y condiciones necesarias para ir al encuentro de los cónyuges en dificultad (EG 48). Es por ello que el párroco, personalmente o a través de otros colaboradores, debe ser el primero en ofrecer la garantía de una atención pastoral básica, cercana e inmediata, a las necesidades de estos fieles en dificultad, a quienes deberá acoger, acompañar, aconsejar y poder de la mejor manera, integrarlos en la comunidad eclesial, en el caso hayan abandonado la práctica religiosa (art.1).

Este proceso de investigación pastoral no puede ser de inquisición o condena, sino de acogida y solución. El principal objetivo de este primer encuentro pastoral es el de acoger eclesialmente a los cónyuges en dificultad matrimonial y familiar, como oferta de caminos eficaces de integración eclesial (AL 299). En este contexto, de evangelización ordinaria, puede propiciarse el inicio de un primer acercamiento entre el párroco y el fiel, en el cual el párroco toma la iniciativa de emprender el dialogo respetuoso sobre la situación actual de su fiel, para ofrecerle la ayuda que necesite (art1). La IPP, es un instrumento de integración en las estructuras eclesiales (habitualmente en la parroquia), de estas parejas. Esta acogida se hace con la finalidad de profundizar en el conocimiento de la realidad de estas personas con la finalidad de conducirles a una comunión con la Iglesia que ellos realmente desean.

El criterio de acompañamiento y de proximidad se comprenden mejor a la luz de la exh. Ap. Evangelii gaudium, que presenta el acompañamiento como un hacerse compañero de camino y de vida, adoptando un ritmo y una meta compartidas. La meta de este acompañamiento es la salus animarum por lo que el modus operandi del acompañante debe ser desde su experiencia, prudencia, capacidad de comprensión, arte de esperar, docilidad al Espíritu, saber escuchar. Sólo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida (171), con respeto y compasión. Antes de pasar a la administración de cualquier otra investigación de naturaleza judicial, aunque parezca inútil, el párroco deberá indagar suficientemente sobre la posibilidad de cualquier posible esperanza de reconciliación matrimonial.

1.b.- Discernimiento: El párroco en esta etapa de investigación pastoral, está llamado a realizar el discernimiento pastoral diferencial que buscará discernir bien las distintas situaciones llamadas "irregulares" (FC 84; AL79). Los divorciados en nueva unión, por ejemplo, pueden encontrarse en situaciones muy diferentes, que no han de ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígidas sin dejar lugar a un adecuado discernimiento personal y pastoral (AL298). Compete al párroco llevar a cabo dicha tarea (art.1; FC84). El discernimiento de los pastores siempre debe hacerse «distinguiendo adecuadamente», con una mirada que «discierna bien las situaciones». (AL298). Se trata de un discernimiento pastoral, diferente al examen técnico canónico posterior, en el que a cada una de las particulares situaciones matrimoniales de los cónyuges corresponderá algún posible camino de respuesta. En este sentido la respuesta puede ser multidisciplinar.

A partir de este discernimiento pastoral diferencial se podría iniciar, en primer lugar, un acompañamiento pastoral de progresiva integración eclesial en las diversas formas posibles,



evitando cualquier ocasión de escándalo. Su participación puede expresarse en diferentes servicios eclesiales. La lógica de la integración es la clave de su acompañamiento pastoral (AL299). Los párrocos tienen la tarea de acompañar a las personas interesadas en el camino del discernimiento de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia y las orientaciones del Obispo (AL 300). El acompañamiento pastoral comporta toda ayuda especializada que pueda brindar la Iglesia a los cónyuges para ayudarlos a superar la crisis, sanar heridas, asesorarlos para hacerles más accesible y ágil la vía judicial. Al cumplir tal obligación, el párroco, deberá estar atento a no caer en la mera aplicación de leyes morales o canónicas, sino que deberá de ir más allá de la casuística insoportable (AL 304), para que, en virtud de la verdad y de la caridad, a partir de un discernimiento diferencial, los cónyuges sean de verdad ayudados por su pastor a emprender el camino más adecuado de respuesta a Dios y de integración eclesial (AL 299). A cada situación corresponderá algún posible y propio camino que deberá ser recorrido por los cónyuges con la ayuda de su párroco.

Para llevar a cabo este discernimiento es importante que el párroco “cuestione” a los esposos sobre la situación concreta en la que están llevando a cabo su actual situación matrimonial: si han contraído matrimonio civil, como están cumpliendo sus obligaciones civiles, sobre la existencia de nuevos hijos, sobre las causas que llevaron a la ruptura, si han sido ayudados por algún tipo de terapia o acompañamiento, etc. Es importante que los cónyuges puedan distinguir entre matrimonio fracasado y matrimonio inválido, como de la presunción de validez que asiste a todo matrimonio religioso (can. 1060).

2.- “Recoger elementos útiles en vista de un posible proceso de nulidad matrimonial”. El segundo objetivo de la IPP.

La más grande y principal novedad, de la cual depende el éxito de la reforma del MIDI, en lo que se refiere a la “celeridad” de los procesos, la encontramos en la preparación de la causa, la que podría garantizar una resolución rápida en sede judicial.

La primera fase de la IPP, generalmente desembocará en esta segunda fase: Esta etapa de información y consulta jurídica, asesora a los cónyuges en vista de la posible realización del proceso. Se insiste mucho en el MIDI que la investigación se debe realizar “en el ámbito de la pastoral matrimonial”, diocesana y parroquial, en vista a la verificación de la validez del matrimonio a través de los tribunales.

Si tras el proceso de acompañamiento, una vez determinada la condición teológica-eclesiológica-sacramental de los cónyuges, aparecieran indicios que hagan dudar de la validez del matrimonio, tendría que administrarse un primer parecer jurídico acerca el proceso de nulidad matrimonial. De este modo se les facilita el acceso a las estructuras judiciales de la Iglesia.

2.- a.- El primer nivel de consulta jurídica, confiado primeramente al párroco o quien haya preparado a los cónyuges para la celebración del matrimonio (art.3), está focalizado en poder ofrecer al cónyuge, que pone en duda la validez de su matrimonio, un parecer sobre la posibilidad de introducir la causa de nulidad de su matrimonio y sobre el modo de proceder, en la medida en que pudiera haber fundamento. Sin preparar técnicamente los elementos útiles para la introducción de la demanda, se da una primera opinión jurídica, sea positiva, negativa o dubitativa (art.113 DC). El principal objetivo de este paso es poder ofrecer un primer parecer jurídico, no vinculante, sobre la

existencia del suficiente fundamento jurídico (*fumus boni iuris*) para introducir su causa matrimonial de nulidad. Este primer parecer corresponde a la preparación remota de la causa, parecer que debe ir acompañado de la administración de la información adecuada tanto respecto al funcionamiento del Tribunal como del proceso judicial mismo. La preparación remota de la causa es ciertamente un aspecto distintivo de la pastoral prejudicial, que no puede iniciarse, acompañarse ni concluirse, sin una cuidadosa actividad de discernimiento que involucra al párroco, también, respecto a aquellos elementos y presupuestos en vista a la verificación de su validez.

Esta obligación del párroco, parte de su *munus consulendi*, forma parte del conjunto de servicios pastorales que él debe ofrecer en la parroquia a los cónyuges separados, abandonados o divorciados para acompañarlos a sanar sus heridas y, para orientarlos hacia la revisión jurídica de su situación matrimonial. Puede darse que en estos encuentros el párroco ayude efectivamente a restablecer el buen vínculo o puede, también, concluir la no existencia de motivos de nulidad matrimonial y por lo mismo desaconsejar el inicio de un proceso, o podría acontecer, incluso, que en los encuentros descubra hechos significativos y objetivos para dudar de la validez del matrimonio. En este último caso no debe esperar alcanzar la certeza moral para aconsejar a los esposos iniciar la preparación del libelo. Lo que nunca debe hacer es, a pesar de la evidencia de elementos que constituyan causales de nulidad, ideológicamente desaconsejar la vía procesal. El párroco es el primero que debe garantizar y facilitar el acceso de los fieles a la estructura judicial, con la misma celeridad y simplicidad que exige este proceso en la Iglesia.

2.b.- El segundo nivel de consulta jurídica especializada, corresponde a la preparación próxima de la presentación de la causa: esta etapa de asistencia técnica más especializada se focaliza en investigar y reunir de modo técnico, los elementos útiles que permitan sostener el “*fumus boni iuris*” de una eventual solicitud de nulidad de acuerdo al tipo de proceso (art.2). El párroco, habiendo determinado que el matrimonio ha fracasado irremediablemente, procederá a realizar el análisis técnico de este matrimonio.

En este momento, el párroco, tendrá que enfrentarse a situaciones específicas y diversas que necesitaran, de su parte, distintas soluciones: podrán acompañar a los cónyuges hasta la solución del conflicto con el restablecimiento de la vida conyugal, la cual, si se ha fundada en un vínculo nulo, puede ser convalidado de acuerdo a los cann. 1156-1165; o podrá sugerir a los cónyuges que formalicen su separación, cann. 1141-1151, la que, si se ha efectuado en el fuero civil, puede ser admitida y reconocida canónicamente por medio de un decreto del obispo; o, una última posibilidad, se da cuando certificada la irreparable crisis matrimonial, y su consecuente ruptura de la convivencia, se propone proceder hacia el análisis técnico de tal situación matrimonial, que tendría como específica finalidad la de recoger elementos útiles para la causa de nulidad, confeccionar el libelo de presentación al Tribunal.

Se debe tener en consideración, además que en esta fase pueden emerger situaciones jurídicas que se pueden dirigir hacia soluciones de naturaleza administrativa: disolución del matrimonio por inconsumación, o en favor de la fe. La investigación, entonces, como servicio de consejería u orientación, no está reservada solamente a los cónyuges católicos, sino que también debe estar abierta a los no bautizados, por ejemplo, cuando se trata de matrimonio por disparidad de culto, o incluso, cuando se trata de verificar la posibilidad de disolución del vínculo natural en favor de la fe en vista de un matrimonio canónico con una parte católica.

A la preparación remota puede seguir, si es el caso, la preparación próxima. Los sujetos involucrados en la misma pueden ser, los cónyuges y el párroco o aquel que ha preparado a los esposos (art.3), a los que se les encomienda tareas de orientación jurídica. Toda esta etapa de preparación de la causa debe estar asegurada, además, por el párroco con discreta y solícita disponibilidad pastoral. En esta etapa el párroco deberá asegurarse del interés en la causa de parte de los cónyuges, de la capacidad procesal de los mismos, del fuero competente que les corresponde, de la existencia del *fumus boni iuris*, de la individuación de los hechos más relevantes ordenados a la petición, individuación del *caput nullitatis* o *ratio petendi*; examen técnico para aconsejar el tipo de proceso; señalar las posibles pruebas a aplicar y que tengan el valor de verificar los hechos más relevantes de la petición; reunir los medios probatorios (art.2), como establece art. 117 DC.

Si el párroco, en esta etapa, no tiene suficientes herramientas para acoger, orientar, aconsejar y proponer, es oportuno que recurra a la ayuda de algún experto según sea la primera necesidad de los cónyuges. Un mínimo de pericia en re canónica puede evitar algunas posiciones: una superficial que ante todo matrimonio fracasado se determine su nulidad, o una que considerando nulo el matrimonio no recomiende la verdad procesal sobre el mismo, o una que ante una mal entendida defensa ideológica de la indisolubilidad matrimonial señala que no hay posibilidad de nulidad. La doctrina contesta dos posturas, un indiscriminado recurso al proceso como un excesivo rigorismo para acceder al mismo.

Para evitar estos excesos, laxismo y rigorismo, es necesario apelar que los párrocos cuando no están preparados para una orientación en materia, deberían renunciar a realizar este acompañamiento, pero al mismo tiempo, facilitar el acceso a quien sí está suficientemente preparado para una consejería en materia. El servicio de verificación de la validez del matrimonio exige una especie de equilibrio y prudencia que sepa articular sensibilidad pastoral, competencia específica y cualidades humanas. Porque las situaciones matrimoniales van afrontadas desde distintos aspectos: religioso, psicológico, moral, espiritual y canónico. En este sentido el párroco se debe abstener de efectuar algún tipo de juicio moral sobre las personas y limitarse a encontrar los elementos que podrían o no dar cauce a un proceso de nulidad matrimonial para alcanzar la verdad jurídica sobre la validez del consentimiento matrimonial. Por lo que, en la etapa de investigación pastoral, el párroco debe garantizar el carácter técnico-jurídico de la misma, garantizando a los cónyuges, además, del apoyo espiritual y moral, un servicio técnico-canónico que se debe asumir en vista a la preparación del libelo.

Volviendo al texto de las Reglas de Procedimiento que regulan la investigación prejudicial o pastoral, intentando desentrañar el sentido con el que se emplea en ella el término “investigación”, comprobamos que son seis las actividades en las que se menciona:

1. La investigación acoge dentro de las estructuras parroquiales o diocesanas a los fieles separados o divorciados, para conocer su condición y recoger elementos útiles para una eventual celebración de un proceso judicial ordinario o brevior.
2. Debe estar integrada en una pastoral matrimonial diocesana unitaria.
3. Es confiada por el obispo a personas idóneas, no exclusivamente con competencias jurídico-canónicas.

4. Puede organizarse mediante una estructura estable y en cooperación con otras diócesis para desarrollarla mejor (vademécum).
5. Recoge elementos para introducir la causa, por parte de los cónyuges o de su patrono, e indaga si están ambos de acuerdo.
6. Concluye en la demanda a presentar, si fuera el caso.

BORRADOR USO PRIVADO